

Los ciudadanos y los funcionarios públicos tomen medidas para detener la corrupción

Por Claudia Sayago

Al igual que muchos sudamericanos, los bolivianos creen que las prácticas corruptas se han generalizado en su país. Algunos piensan que la corrupción es incontrolable, ya que simplifica su vida (el pago de sobornos para hacer las cosas), mientras que otros lo ven simplemente como una forma de hacer negocios con el Estado.

Un estudio del 2005 promovido por la coalición Red Anticorrupción Bolivia estima que la corrupción pequeña relacionada con el uso de los servicios públicos representa un costo de 905 millones de bolivianos (U\$ 122 millones de dólares americanos) cada año. En promedio, 168 bolivianos (U\$ 23) son pagados en sobornos por procedimientos administrativos y casi el 13 % de las solicitudes de servicios públicos se cumplen sólo después de que un soborno se ha pagado.

Romper el círculo vicioso requiere, entre otras cosas, la participación de aquellos que están en condiciones de cambiar la situación. Con esto en mente, la ONUDD ha organizado una serie de seminarios para funcionarios públicos, durante la cual expertos internacionales y locales capacitaron a los funcionarios públicos acerca de los principios enunciados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las obligaciones que el Gobierno de Bolivia tiene como una de las partes en el Convenio. En las sesiones de capacitación, los profesionales también examinaron la mejor manera de aplicar la Convención, por ejemplo mediante la creación y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción, fomentar la cooperación judicial y recuperar los activos robados.

Los funcionarios públicos, policías y fiscales que participan en los talleres tuvieron diferentes opiniones sobre el tema. Algunos sostuvieron que las leyes actuales son suficientes y no necesitan ser reformadas. Otros dijeron que las leyes existen sobre el papel pero no se hacen cumplir. Un tercer grupo cree que la legislación vigente debería ser mejorada.

Si bien todos estuvieron de acuerdo en que la corrupción en la administración pública debe ser combatida, los participantes fueron menos claros acerca de las soluciones. La Convención contra la Corrupción proporciona normas específicas en apoyo pero, en última instancia, los Estados partes son responsables de la aplicación de sus disposiciones. El Estado Boliviano ya está trabajando en ello.

En lo que respecta a las raíces de la corrupción, los participantes del taller expresaron en repetidas ocasiones el criterio sobre que la corrupción va a continuar siempre y cuando los funcionarios públicos sigan siendo mal pagados y que la corrupción no se puede detener por decreto.

Independientemente de que la lucha contra la corrupción es la estrategia elegida, la participación social es esencial para lograr el cambio. Es por ello que un amplio segmento de la sociedad boliviana debe estar involucrada en la aplicación de la estrategia nacional. Con la asistencia prestada a través del programa de mentores de lucha contra la corrupción de la ONUDD, el diseño de una estrategia está en marcha. Se han creado grupos de trabajo para revisar y modificar la legislación y se han organizado sesiones de capacitación para los funcionarios públicos.

La tarea es enorme, la mejor estrategia es una cuestión de decisión pero la financiación no está siempre disponible. Sin embargo, los bolivianos en todo el país están de acuerdo en que la corrupción debe ser combatida. Bolivia ya está en buen camino y ahora está recibiendo el apoyo internacional para lograr resultados. El mérito, sin embargo, es y será de la mayoría de los ciudadanos que han decidido encarar esta tarea y mejorar las perspectivas de su país.